

“México será el único país que elegirá a todos sus jueces.”

El 1 de junio los mexicanos votarán para elegir jueces para 850 cargos federales, nueve puestos en la Suprema Corte, 22 influyentes cargos en tribunales y miles de puestos en tribunales inferiores. En 2027, una segunda votación completará el resto del poder judicial de México. Algunos países eligen a un puñado de jueces, principalmente para tribunales inferiores. México se convertirá en el primer país del mundo donde cada juez en cada tribunal será elegido por voto popular.

El Congreso de México aprobó los cambios constitucionales necesarios para esta transformación en septiembre del año pasado. Fue el acto final de Andrés Manuel López Obrador como presidente, logrando uno de sus objetivos máspreciados. Su sucesora, Claudia Sheinbaum, ha seguido sus pasos. Su partido, Morena, argumenta que la elección de jueces hará al poder judicial más democrático, purgará la corrupción y el nepotismo, y ampliará el acceso a la justicia. «El público no es tonto», dice Olivia Aguirre Bonilla, candidata a la Suprema Corte. «Si confiamos en los votantes para elegir un presidente, ¿por qué no a los jueces?»

El sistema de justicia del país ha estado en mal estado. Aunque el poder judicial federal se ha profesionalizado más en los últimos 30 años, más del 90% de los delitos no se denuncian. Solo el 14% de las denuncias resultan en condenas. Algunos jueces son corruptos. Pero hay buenas razones por las que tan pocas democracias piden a los votantes que seleccionen jueces. Tener que buscar la elección somete a los jueces al poder distorsionador de la opinión pública. Los jueces electos son menos propensos a defender la ley cuando hacerlo es impopular. También son menos propensos a hacer rendir cuentas a los políticos cuando esos políticos siguen el sentir popular. «Nadie me eligió», dice Martha Magaña, una jueza federal en funciones que no se postula para la elección. «Así que cuando emito un fallo, no le debo nada a nadie». Elegir a todos los jueces

es una mala idea «y punto», dice Julio Ríos, político del ITAM, una universidad en la Ciudad de México.

El único lugar donde actualmente se eligen jueces para tribunales superiores es Bolivia. Los jueces de su Corte Suprema han sido elegidos desde 2011. El mecanismo de selección ha sido un desastre, con la autoridad de la corte socavada por una interminable disputa política para controlarla. Dos quintas partes de los bolivianos que votaron en la elección judicial más reciente anularon sus votos.

En México, las elecciones judiciales plantean un peligro más grave que el mero caos: el control del sistema de justicia por parte de los carteles de la droga. Las bandas criminales no dudan en matar o amenazar a funcionarios públicos para conseguir lo que quieren. Los carteles ya presentan a sus propios candidatos en las elecciones locales. La corrupción más cotidiana de jueces por parte de empresarios y funcionarios, también endémica, probablemente se expandirá.

Es difícil no ver las elecciones como un paso final que afianza a Morena como el poder hegemónico político de México. El Sr. López Obrador llegó al poder descalificando a los jueces como elitistas y parciales. Al bloquear varias de sus reformas emblemáticas, como un intento de entregar el control de la Guardia Nacional al ejército (posteriormente impulsado mediante una reforma constitucional), la Suprema Corte se convirtió en un objetivo. Gerardo Noroña, un político de Morena que lidera el Senado, afirma que los jueces en el antiguo sistema de nombramientos de México no aplican la ley. «Responden a intereses políticos y económicos», dice. «Ellos son los que han quebrantado el estado de derecho».

Las posibilidades de coerción y corrupción han aumentado debido al débil proceso mediante el cual los candidatos llegan a la boleta electoral. Solo necesitan un título en derecho con buenas calificaciones, cinco años de experiencia legal y cinco cartas de recomendación. En poco más de seis semanas, tres comités evaluaron a 24,000 candidatos. Las entrevistas a menudo duraban solo unos minutos. Además, los comités provenían del

ejecutivo, legislativo y judicial, lo que significa que dos de los tres estaban dominados por Morena.

Como resultado, algunos candidatos con conocidos nexos criminales han llegado a la boleta, un hecho que Morena admite. Esto ha llevado a una farsa. El Senado insiste en que solo la autoridad electoral tiene el poder de eliminar los nombres vinculados a bandas criminales. La autoridad electoral dice que no puede hacerlo. En cambio, parece que los nombres de los candidatos contaminados aparecerán en las boletas, pero que si alguno de ellos gana un puesto de juez, sus victorias serán anuladas. En medio del caos, es difícil imaginar que las bandas no hayan logrado infiltrar a algunas de sus propias personas, o a aquellos que controlan, en al menos algunas de las miles de contiendas sin ser detectados.

Se perderá el conocimiento institucional. Solo una minoría de los jueces federales en funciones se postulan para la elección. Solo tres de los 11 jueces actuales de la Suprema Corte se están postulando. Un estudio del Sr. Ríos encontró que se necesitaban un promedio de 24 años para convertirse en magistrado. A partir de junio, los casos sobre derecho constitucional y disputas comerciales millonarias serán escuchados por personas que quizás nunca hayan pisado un tribunal.

Es poco probable que Morena sufra muchas derrotas en los nuevos tribunales. No solo tiene una gran influencia sobre qué candidatos llegan a la boleta. También, a través de su gente en el tribunal disciplinario, tiene cierto control sobre el comportamiento de los jueces una vez que son elegidos. «Podemos esperar que el gobierno no pierda los casos que le importan», dice el Sr. Ríos.

Y aunque Morena dice que las elecciones se tratan de la rendición de cuentas democrática, se espera que la participación sea muy baja. Solo el 7% de los votantes se presentó en 2021 para votar en el referéndum del Sr. López Obrador sobre si debía enjuiciar a un puñado de expresidentes. En contraste, la participación en la elección presidencial del año pasado fue del 61%.

Incluso algunos simpatizantes de Morena reconocen las fallas de las elecciones judiciales. Pero el tiempo de la resistencia ha pasado. Mauricio Flores Castro, un abogado que se postula para un puesto en la Suprema Corte, dice que hay dos opciones: «Criticar desde la barrera o involucrarse e intentar mejorar las cosas. Este camino puede no ser perfecto, pero es el que hemos elegido. La historia lo juzgará».